**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 39/2003.**

SERVIDOR PÚBLICO:

**México, Distrito Federal a seis de febrero de dos mil
cuatro.**

Vistos para emitir resolución definitiva en el procedimiento
de responsabilidad administrativa **39/2003**, y;

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Mediante oficio CRRP/DRP/1312/2003 de
veintiocho de octubre de dos mil tres, recibido el mismo día en
la Dirección General de Control Interno de la Dirección de
Responsabilidades de la Contraloría de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, el Director de Registro Patrimonial hizo
del conocimiento de la Directora de Responsabilidades de la
citada Contraloría la presunta infracción en que incurrió la
servidora pública ***** dispuesto en los artículos 35, 36 y
37, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, y en el Acuerdo
General Plenario 6/1996, en virtud de que fue omisa en la
presentación de la declaración de inicio de encargo, como jefe

de departamento, puesto de confianza, adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. Por acuerdo de tres de noviembre de dos mil tres, se admitió a trámite la denuncia por incumplimiento de la obligación de presentar la declaración patrimonial de inicio de encargo dentro del término señalado en la ley en contra de ***** se registró con el número de expediente **39/2003**; y, se notificó a la servidora pública el once de noviembre de dos mil tres para el efecto de que en un plazo de cinco días hábiles formulara un informe sobre los hechos relacionados con el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en su contra y ofreciera las pruebas correspondientes.

TERCERO. El veintiuno de enero de dos mil cuatro, la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió dictamen con los puntos resolutivos siguientes:

“PRIMERO. ** no es responsable de la infracción administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto por los artículos 8, fracción XV, y 37, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y el punto de acuerdo QUINTO, numeral 27 del Acuerdo Plenario 6/1996, modificado por el Acuerdo 12/2003 del Tribunal Pleno conforme lo***

expuesto en el quinto considerando de este dictamen.

SEGUNDO. Notifíquese personalmente a ** y una vez cumplido ello, remítanse los autos del procedimiento administrativo de responsabilidades en que se actúa a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Suprema corte de justicia de la Nación para los efectos precisados en la parte final del último considerando.”***

Para sustentar su dictamen, la Contraloría se basó, en las consideraciones que se sintetizan a continuación:

1. Se establece que la infracción que se atribuye a ***** consiste en no haber presentado declaración de situación patrimonial de inicio de encargo como consecuencia de haber sido nombrada jefe de departamento, cargo en el que los servidores públicos que lo desempeñan deben presentar declaración de situación patrimonial cuando realizan alguna de las actividades previstas en el artículo 36, fracción XII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y deben hacerlo en el plazo previsto para el efecto en el artículo 37 de esa misma ley.

2. Se concluye que ***** no tenía obligación de presentar declaración de inicio de encargo por las razones siguientes:

a) De lo dispuesto en el punto de acuerdo séptimo del Acuerdo General Plenario 6/1996 es posible concluir que, con independencia del cargo con el que se nombra a un servidor público de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –entre aquellos que se encuentran obligados a declarar su situación patrimonial-, cuando dicho nombramiento se expide por un plazo no mayor de tres meses y con motivo de cubrir un interinato, ese servidor público no estará obligado a presentar declaración de inicio o conclusión de encargo, en términos de lo dispuesto en el inciso d) de dicha disposición, hipótesis en la que se ubicó la servidora pública de que se trata.

b) De la copia certificada del nombramiento expedido por el Encargado de la Dirección General de Recursos Humanos el veintiuno de agosto del año próximo pasado, a favor de ***** se aprecia que el nombramiento fue como jefe de departamento adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Alto Tribunal, en sustitución de otra servidora pública a quien se le concedió licencia por maternidad y se le otorgó ese nombramiento por un plazo menor a tres meses, del doce de agosto al nueve de noviembre de dos mil tres. En tales condiciones y con fundamento en lo dispuesto en el punto Séptimo, inciso d), del Acuerdo Plenario 6/1996, ***** no tenía obligación de presentar declaración de inicio de encargo pues se le designó en el puesto descrito para cubrir una licencia por maternidad, es decir un interinato, y fue por un plazo menor a tres meses; de ahí que no incumplió con lo dispuesto en los

artículos 8, fracción XV, y 37, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

c) Además, de la constancia de actividades que ***** acompañó al rendir su informe, se llega a la conclusión de que no es responsable de la infracción administrativa que se le atribuye en la queja presentada en su contra, ya que aun cuando ocupó el cargo de jefe de departamento adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Alto Tribunal, en términos de lo establecido por el Pleno de esta Suprema Corte en el Acuerdo General 12/2003, al no realizar alguna de las actividades contempladas en la fracción XII del artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no se encontraba obligada a presentar declaración de inicio de encargo.

Esto es así, porque si bien es cierto que fue nombrada como jefe de departamento adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Suprema Corte, también lo es que durante el tiempo que desempeñó ese cargo, no llevó a cabo alguna de las actividades previstas en el artículo 36, fracción XII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el segundo punto transitorio del Acuerdo 12/2003, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se arriba a la conclusión de que la servidora pública a la que se le siguió el procedimiento de responsabilidad administrativa no es responsable de la infracción que se le atribuye. Lo anterior deriva de la constancia

expedida por el Director General de Asuntos Jurídicos de este Alto Tribunal, que ***** presentó como prueba al rendir su informe, documental a la que se le concede valor probatorio pleno.

Cabe agregar que aun cuando se considerara que ***** no presentó declaración de inicio del encargo, si bien en el momento en que se le designó como jefe de departamento adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos aun no se había reformado el punto quinto, numeral veintisiete, del Acuerdo General Plenario 6/1996; sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el segundo transitorio del Acuerdo Plenario 12/2003 no es causa de responsabilidad administrativa de los jefes de departamento que realicen actividades distintas a las señaladas en el artículo 36, fracción XII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el haber omitido presentar declaración de situación patrimonial, cuando ello ocurre después de la entrada en vigor de la ley de responsabilidades a la que se hace referencia.

3. Al no existir la infracción administrativa que se atribuyó a ***** no se propone sanción alguna en su contra y se considera innecesario el análisis del resto de sus defensas, así como el del resto de las pruebas que ofreció con su informe.

CUARTO. El referido dictamen se notificó personalmente a ***** el veintidós de enero de dos mil cuatro, haciéndole saber que con fundamento en el artículo tercero, fracción XIV,

párrafos segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General de Administración II/2003, podía comparecer ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de los diez días siguientes, al en que surtiera efectos dicha notificación, a manifestar por escrito lo que a su derecho conviniera, así como a ofrecer las pruebas que estimara pertinentes.

Practicada la notificación a la que se alude en el párrafo que antecede, mediante oficio C/CRARP/0012/2004, el Contralor de este Alto Tribunal remitió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos el expediente de responsabilidad administrativa **39/2003**.

QUINTO. El cuatro de febrero de dos mil cuatro, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Alto Tribunal emitió opinión en el sentido de que***** no incurrió en la falta administrativa materia del procedimiento de responsabilidad administrativa que culmina con la presente resolución.

SEXTO. Aun cuando no ha transcurrido el plazo para que ***** manifieste lo que a su derecho convenga, en términos de lo previsto en el artículo tercero, fracción XIV, párrafos segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General de Administración II/2003, modificado por el diverso XI/2003, resulta innecesario esperar a que concluya dicho plazo toda vez que la resolución que se emite no le depara perjuicio alguno.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 133, en relación con el 14, fracción XXI, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitir resolución definitiva en el presente procedimiento de responsabilidades administrativas, seguido en contra de ***** pues se trata de una servidora pública de este Alto Tribunal a la que se le atribuye una conducta infractora que no está catalogada como grave.

SEGUNDO. Antes de abordar el estudio del referido dictamen y del procedimiento que le precedió, resulta conveniente precisar que tal y como se determinó en la resolución correspondiente al procedimiento de responsabilidad administrativa 17/2003, seguido en contra de ***** de ocho de enero de dos mil cuatro, ante la falta de regulación expresa, bien sea en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o en las disposiciones de observancia general que al efecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe aplicarse directamente lo dispuesto en el marco legal que constituye el sistema general de responsabilidades y que se encuentra establecido en la respectiva ley federal, es decir, debe atenderse a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que si en el artículo 47 de este ordenamiento se establece que en todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esa ley, así como en la

apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, debe concluirse que ante los vacíos legislativos que presente la regulación creada específicamente para esta Suprema Corte, el ordenamiento de aplicación supletoria será precisamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

TERCERO. La presente resolución se emite exclusivamente con base en el análisis del dictamen y en las constancias que obran en el expediente.

En efecto, toda vez que el dictamen emitido en el expediente administrativo de responsabilidades 39/2003 se notificó personalmente a la servidora pública investigada el jueves veintidós de enero de dos mil cuatro, dicha notificación surtió efectos el viernes veintitrés, por lo que el plazo de diez días previsto en el punto ÚNICO del Acuerdo General de Administración XI/2003, transcurrirá del lunes veintiséis de enero al lunes nueve de febrero del año en curso, debiendo descontarse dentro del cómputo respectivo los sábados treinta y uno de enero y siete de febrero y los domingos uno y ocho de febrero, así como el jueves cinco de febrero que fueron inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, aun cuando no ha transcurrido el plazo para que ***** manifieste lo a que su derecho convenga en términos de lo previsto en el artículo tercero, fracción XIV, párrafos segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General de Administración II/2003, resulta innecesario esperar a que concluya dicho plazo puesto que la presente resolución no le depara perjuicio alguno.

CUARTO. Resulta innecesario pronunciarse sobre el procedimiento seguido en el presente asunto, pues aun cuando se hubiera cometido alguna irregularidad, ésta sería intrascendente, en virtud de que la presente resolución no le depara perjuicio alguno a la servidora pública respecto de la cual se inició éste.

QUINTO. De las constancias que integran el presente expediente se desprende, como se estableció en los resultados que anteceden, que el procedimiento respectivo inició con la denuncia presentada por el Director de Registro Patrimonial en contra de ***** y que la Contraloría de este Alto Tribunal estimó que existían elementos suficientes para sostener que la mencionada servidora pública incumplió con las obligaciones contenidas en los artículos 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 8º, fracción XV, 36, fracción XI, y 37, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al no presentar su declaración de inicio de encargo dentro del plazo que para el efecto se encuentra señalado en la ley.

De tal manera, para estar en aptitud legal de determinar si ***** omitió cumplir alguna de sus obligaciones relacionadas con el registro patrimonial, es imprescindible tener presente el contenido de los preceptos que se estiman violentados.

Así, se advierte que los artículos 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 8º, fracción XV, 36, fracción XI, y 37, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, son del tenor siguiente:

“ARTÍCULO 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:

...XI. Las previstas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional...”

“ARTÍCULO 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

...XV. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la Ley...”

“ARTÍCULO 36. Tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 35, bajo protesta de decir verdad, en los términos que la Ley señala:

...XI. En los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de los titulares de aquéllos...”

“ARTÍCULO 37. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:

a) Ingreso al servicio público por primera vez;

b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;

c) Cambio de dependencia o entidad, en cuyo caso no se presentará la de conclusión.”

Asimismo, destaca que en el numeral 27 del artículo quinto del Acuerdo General Plenario 6/1996, se señala:

QUINTO.- Los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligados a presentar declaraciones sobre situación patrimonial son:

...27.- Jefes de Departamento (Nivel mínimo, medio y máximo, cualquiera que sea su función administrativa).”

Este último fue reformado por el Pleno de este Alto Tribunal mediante el Acuerdo General 12/2003 del doce de noviembre de dos mil tres, para quedar como sigue:

“QUINTO. Los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligados a presentar declaraciones sobre situación patrimonial son:

... 27. Jefes de Departamento, cuando realicen actividades de las señaladas en la fracción XII del artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.”

De lo dispuesto en los artículos que anteceden se desprende la obligación a cargo de los servidores públicos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que tengan el cargo de jefes de departamento, de presentar declaración inicial de situación patrimonial en los plazos señalados por la ley y manifestando con veracidad la información que en el formato respectivo se les requiera, siempre que realicen actividades de las señaladas en la fracción XII del artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es decir, cuando manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos de la Federación, realicen actividades de inspección o vigilancia, lleven a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, y quienes intervengan en la adjudicación de pedidos y contratos.

Ahora bien, en el caso de ***** se le atribuyó como infracción el no haber presentado declaración de situación patrimonial de inicio de encargo con motivo de su nombramiento del veintiuno de agosto de dos mil tres como **“jefe de departamento, puesto de confianza, nivel medio, adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la S.C.J.N., en sustitución de**

******* quien goza de licencia por maternidad, con efectos este nombramiento a partir del doce de agosto al nueve de noviembre del presenta año...**” (fojas 4 del expediente); sin embargo, para concluir tal omisión se pasó por alto lo dispuesto en el Acuerdo General Plenario 6/1996, en cuyo punto de acuerdo séptimo se establece lo que a continuación se reproduce:

“SÉPTIMO. No estarán obligados a presentar declaración final o inicial sobre situación patrimonial, los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como los coordinadores y demás servidores directamente adscritos a la Presidencia de dicho Tribunal que:

- a) Sean cambiados de adscripción;**
- b) Les sea concedida licencia que no exceda de tres meses;**
- c) Les sea concedida licencia por motivos de salud que no exceda de un año;**
- d) Cubran interinatos que no excedan de tres meses;**
- e) Sean nombrados en diversos cargos al que desempeñaban dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Sala Superior o de la Presidencia del Tribunal Electoral, en el que hubiesen estado obligados a presentar la**

declaración correspondiente, o cuando el cargo cambie de nombre.”

De tal manera, conforme a lo dispuesto en el transcrito inciso d), ***** no estaba obligada a presentar declaración inicial de situación patrimonial, pues su nombramiento se hizo para cubrir la ausencia de ***** quien se encontraba gozando de licencia por maternidad; por consiguiente, ***** cubrió un interinato y lo hizo por un plazo menor a tres meses, pues se le nombró con efectos a partir del doce de agosto y hasta el nueve de noviembre de dos mil tres.

En tal virtud, se considera que ***** no incumplió con lo dispuesto en los artículos 8, fracción XV, y 37, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

No sobra agregar que ***** demostró con la constancia expedida por el titular de la dirección a la que fue adscrita y que acompañó al rendir su informe, que durante el periodo que estuvo en vigor su nombramiento como jefe de departamento no manejó recursos económicos, valores y fondos de la Federación, no realizó actividades de inspección o vigilancia, no llevó a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones y no intervino en la adjudicación de pedidos o contratos, por tanto, no realizó ninguna de las actividades señaladas en la fracción XII del artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de ahí que tampoco se encontraba obligada a presentar declaración de inicio de encargo, en atención a lo dispuesto en el reformado punto veintisiete del artículo quinto del Acuerdo Plenario 6/1996 que

resulta aplicable al caso, de conformidad con lo que se ordena en el artículo segundo transitorio del diverso Acuerdo Plenario 12/2003, mediante el que se modificó el señalado artículo quinto y en el que se establece:

“SEGUNDO. No es causa de responsabilidad administrativa de los Jefes de Departamento que realizan actividades diversas a las señaladas en la fracción XII del artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, haber omitido presentar sus declaraciones de situación patrimonial cuando dicha omisión sea posterior a la entrada en vigor de ese ordenamiento.”

Como se advierte del numeral transcrito, tratándose de jefes de departamento que omitieron presentar su declaración de situación patrimonial con posterioridad al catorce de marzo de dos mil dos y no realizaban actividades de las señaladas en la fracción XII del artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la referida omisión no podría estimarse como causa de una responsabilidad administrativa.

Conforme a lo anterior, se concluye que si ***** fue nombrada jefe de departamento con posterioridad al catorce de marzo de dos mil dos, no estaba obligada a presentar declaración patrimonial de inicio y, por consiguiente, no incurrió en violación a la Ley Federal de Responsabilidades.

En las relatadas condiciones, se estima que al no existir la infracción que se atribuyó a ***** en la denuncia presentada por

la Dirección de Registro Patrimonial, no hay motivo para imponerle sanción alguna.

Ante esa conclusión resulta innecesario analizar el resto de las manifestaciones vertidas por la servidora pública al rendir su informe, así como el análisis del resto de las pruebas que ofreciera.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Conforme a lo expuesto en la consideración tercera de esta opinión, ***** no incurrió en la falta administrativa materia de este procedimiento de responsabilidad administrativa.

Notifíquese; personalmente a la servidora pública sujeta al respectivo procedimiento y devuélvase el expediente a la Contraloría de este Alto Tribunal.

Así, lo resolvió el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.